

La notificación a las personas jurídicas a través de la Sede Judicial Electrónica

Francisco J. García Rivas

Secretario de Gobierno TSJ Región de Murcia

Diario La Ley, Nº 9261, Sección Tribuna, 18 de Septiembre de 2018, Editorial **Wolters Kluwer**

LA LEY 7553/2018

Normativa comentada

L 18/2011 de 5 Jul. (uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia)

- TÍTULO III. Régimen jurídico de la Administración judicial electrónica
 - CAPÍTULO I. De la sede judicial electrónica
 - [Artículo 9. Sede judicial electrónica.](#)

L 1/2000 de 7 Ene. (Enjuiciamiento Civil)

- LIBRO I. De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles
 - TÍTULO V. De las actuaciones judiciales
 - CAPÍTULO V. De los actos de comunicación judicial
 - [Artículo 162. Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares.](#)

Comentarios

Resumen

Con la interpretación integradora de la normativa vigente no cabe duda no solo de la validez, sino también de la obligación de realizar todas las comunicaciones con las personas jurídicas de los actos procesales electrónicamente, a través de la dirección electrónica habilitada, siendo plenamente aplicable el artículo 162 LEC en cuanto a su eficacia y consecuencias. No obstante, a la vista de las posturas discordantes, todas jurídicamente defendibles, sería de agradecer una aclaración vía pleno no jurisdiccional por parte del Tribunal Supremo en evitación de situaciones que pudieran determinar la nulidad de lo actuado con la pérdida que conlleva, tanto para el justiciable como para las oficinas judiciales.

I. ¿Qué es la Sede Judicial Electrónica del Ministerio de Justicia? ¿Y la Dirección Electrónica Habilitada Única?

La [Ley 18/2011, de 5 de julio \(LA LEY 14138/2011\)](#), reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, dedica específicamente su [Título III \(LA LEY 14138/2011\)](#) a definir y regular la llamada «**Sede Judicial Electrónica**» que de conformidad con su [artículo 9 \(LA LEY 14138/2011\)](#) se define como «aquella dirección electrónica disponible para los

ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las Administraciones competentes en materia de justicia».

Con la implantación de la Sede Judicial Electrónica se pretende centralizar los procedimientos y servicios que presta cada una de las oficinas judiciales dentro del ámbito del Ministerio de Justicia, al objeto de facilitar el acceso a las mismas, así como crear un espacio en el que la Administración de Justicia, el ciudadano y los profesionales se relacionen en el marco de la actividad judicial con las garantías procesales necesarias.

El [artículo 9 \(LA LEY 14138/2011\)](#) del mencionado texto normativo establece que «las Administraciones competentes en materia de justicia determinarán las condiciones e instrumentos de creación de las sedes judiciales electrónicas» que en todo caso se crearán mediante disposición publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» correspondiente.

En el ámbito del Ministerio de Justicia se da cumplimiento al anterior mandato por medio de la [Orden JUS/1126/2015, de 10 de junio \(LA LEY 10037/2015\)](#), publicada en el Boletín Oficial del Estado de 16 de junio de 2015.

La Sede Judicial Electrónica está dirigida a ciudadanos y profesionales que quieren, o deben, interactuar con la Administración de Justicia a través de internet

La Sede Judicial Electrónica del Ministerio de Justicia abarca por tanto, el ámbito de sus competencias en materia de Administración de Justicia, es decir, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y León, Islas Baleares, Región de Murcia, Ceuta y Melilla, y es un portal *Web* con un nivel superior de garantías y seguridad en los contenidos y trámites electrónicos donde se pueden realizar consultas y trámites de forma telemática con la Administración de Justicia. **Está dirigida a ciudadanos y profesionales de la justicia que quieren, o deben, interactuar con la Administración de Justicia a través de internet.**

En el siguiente enlace se puede acceder a toda la normativa asociada que regula la Sede Judicial Electrónica:

https://sedejudicial.justicia.es/sje/publico/sjepublico/conozca_sede/normativa

Los servicios electrónicos prestados al ciudadano estarán disponibles las 24 horas del día durante todos los días del año, sin perjuicio de las intervenciones por mantenimiento técnico, y son principalmente los siguientes:

- — Identificación y autenticación mediante la plataforma cl@ve.
- — Cotejo de documentos mediante Código Seguro de Verificación.
- — Suscripción a los avisos de señalamientos de Juicios.
- — Servicio de compartición de documentos.
- — Consulta del estado del expediente.
- — Procedimiento monitorio (jurisdicciones civil y social).
- — Presentación de escritos.

- — Acceso a los actos de comunicación judiciales.
- — Inscripción de apoderamientos *Apud acta*.
- — Acceso a la plataforma de Subastas Judiciales Electrónicas.
- — Acceso a la plataforma de Lexnet para los profesionales de la Justicia.
- — Formulación de Quejas y Sugerencias.

Bien, paralelamente y para comprender después el *iter* de las comunicaciones desde los órganos judiciales a las personas jurídicas, hay que mencionar también la **Dirección Electrónica Habilitada Única**.

Mediante la Dirección Electrónica Habilitada Única, anteriormente denominada Dirección Electrónica Habilitada, cualquier persona física o jurídica podrá disponer de una dirección electrónica, para la recepción de las notificaciones administrativas que por vía telemática pueda practicar la Administración General del Estado, organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales.

Asociado a ésta, su titular dispondrá de un buzón electrónico en el que recibirá las notificaciones electrónicas correspondientes a aquellos procedimientos a los que voluntariamente decida suscribirse u obligatoriamente haya quedado suscrito por alguna disposición legal, o en general esté obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, según establece el [artículo 14 de la Ley 39/2015 \(LA LEY 15010/2015\)](#).

La Dirección Electrónica Habilitada tendrá una vigencia indefinida, excepto en los supuestos de revocación por parte del titular, el fallecimiento de la persona física o extinción de la personalidad jurídica en el caso de empresas, o porque así lo establezca una resolución administrativa o judicial.

La [Ley 39/2015 \(LA LEY 15010/2015\)](#), de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha establecido la obligación de relacionarse de manera electrónica con la Administración en el [art. 14.2 \(LA LEY 15010/2015\)](#) para determinados sujetos:

- **a. Las personas jurídicas.**
- **b.** Las entidades sin personalidad jurídica.
- **c.** Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- **d.** Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración

II. La obligatoriedad de la comunicación bidireccional entre las personas jurídicas y los órganos judiciales

Comienza el [preámbulo de la Ley 18/2011, de 5 de julio \(LA LEY 14138/2011\)](#), reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia indicando que «todas las personas tienen derecho a obtener

la tutela efectiva de sus derechos ante los tribunales. Así se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico en el [artículo 24.1 de la Constitución \(LA LEY 2500/1978\)](#) y en el [artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos \(LA LEY 129/1966\)](#). Para salvaguardar dichos derechos de los ciudadanos es necesaria la modernización de la Administración de Justicia, campo esencial para consolidar el Estado de Derecho y mejorar la calidad de nuestra democracia. En este contexto de modernización, uno de los elementos de mayor relevancia es, precisamente, la incorporación en las oficinas judiciales de las nuevas tecnologías. Su uso generalizado y obligatorio contribuirá a mejorar la gestión en las oficinas judiciales, actualizando su funcionamiento e incrementando los niveles de eficiencia. Las nuevas tecnologías permiten igualmente abaratar los costes del servicio público de justicia, pero también suponen una mejora de la confianza en el sistema, lo que se traduce en mayor seguridad».

La Ley no solo apuesta decididamente por el uso de las **nuevas tecnologías** en el ámbito de las comunicaciones, sino que con carácter generalizado ordena, en su [artículo 8 \(LA LEY 14138/2011\)](#), la **obligación del uso de las mismas** dentro del proceso y en una doble dirección, de una parte para todos los integrantes de órganos y oficinas judiciales y fiscales y de otra, para los que denomina «profesionales de la justicia», englobando, según el [artículo 2 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre \(LA LEY 18232/2015\)](#) sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia, a Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Cuerpo de Abogados del Estado, Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas y Letrados del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad social, de las demás Administraciones públicas, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los Colegios de Procuradores.

En este punto, y en el ámbito de las comunicaciones, hay que distinguir entre aquellos para los que la comunicación electrónica con la Administración de Justicia es un derecho, una opción que pueden o no ejercitar, y estos son los ciudadanos ([art. 33 Ley 18/2011 \(LA LEY 14138/2011\)](#), y [art. 4 RD 1065/2015 \(LA LEY 18232/2015\)](#)) y aquellos que están obligados a comunicarse con la Administración de Justicia en todo caso a través de canales electrónicos, a saber:

- **a) Las personas jurídicas.**
- **b) Las entidades sin personalidad jurídica.**
- **c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.**
- **d) Los Notarios y Registradores.**
- **e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia. ([art 4 RD 1065/2015 \(LA LEY 18232/2015\)](#)).**
- **f) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su cargo.**
- **g) Y los que legal o reglamentariamente se establezcan.**

III. Forma de realización de las comunicaciones; la legislación procesal

La reforma del [artículo 230.1 de la Ley Orgánica del poder Judicial \(LA LEY 1694/1985\)](#), operada por la [Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio \(LA LEY 12048/2015\)](#), establece- en sintonía con lo dispuesto en la [Ley 18/2011 \(LA LEY 14138/2011\)](#), Ley transversal y complementaria de la legislación vigente en lo relativo al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia ([disposición adicional 7ª \(LA LEY 14138/2011\)](#))- la obligatoriedad de la utilización por los Juzgados de los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones.

Dispone la [Ley 18/2011 \(LA LEY 14138/2011\)](#), en el [apartado dos del artículo 33 \(LA LEY 14138/2011\)](#) que «las comunicaciones a través de medios electrónicos se realizarán, en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en la legislación procesal», y en parecidos términos, el Real Decreto Lexnet indica en el [apartado 1 del artículo tercero \(LA LEY 18232/2015\)](#) que «las comunicaciones y notificaciones realizadas por canales electrónicos deberán ajustarse a las normas procesales». Veámoslas.

La [Ley 42/2015, de 5 de octubre \(LA LEY 15164/2015\)](#), a la hora de modificar la LEC, señala en su [Exposición de Motivos \(LA LEY 15164/2015\)](#): «constituye una necesidad imperiosa acometer una reforma en profundidad de las diferentes actuaciones procesales para generalizar y dar mayor relevancia al uso de los medios telemáticos o electrónicos, otorgando carácter subsidiario al soporte papel». Y añade «con la finalidad de que la comunicación electrónica sea la forma habitual de actuar en la Administración de Justicia también en relación con los ciudadanos, se establece expresamente que los actos de comunicación se podrán realizar en la dirección electrónica habilitada por el destinatario o por medio de otro sistema telemático, aunque ello será posible a partir del 1 de enero de 2017».

Se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo nuevas medidas

Asimismo, se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de los actos de comunicación, como es el envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible, a los dispositivos electrónicos designados».

Y la LEC, es meridianamente clara al establecer con carácter imperativo en el [artículo 152.2 \(LA LEY 58/2000\)](#) que «los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos **cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos** existentes en la Administración de Justicia conforme al [artículo 273 \(LA LEY 58/2000\)](#), o cuando aquéllos, sin estar obligados, opten por el uso de esos medios, con sujeción, en todo caso, a las disposiciones contenidas en la normativa reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. (...)». Y como hemos visto, **las personas jurídicas lo están**, como de otra parte igualmente lo establece el [artículo 273.3 \(LA LEY 58/2000\)](#) del mismo texto.

Por tanto, queda claro que la comunicación bidireccional entre órganos judiciales y personas jurídicas se debe realizar, imperativamente, vía electrónica.

Refuerza este planteamiento el [artículo 162.1 LEC \(LA LEY 58/2000\)](#): «cuando las oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación estén obligados a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, o cuando los destinatarios opten por estos medios, los actos de comunicación se efectuarán por aquellos, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda».

En relación a la eficacia de tales comunicaciones, el [apartado 2 del artículo 162 \(LA LEY 58/2000\)](#) establece que «2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, **transcurrieran tres días** sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos. Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese período. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo, pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción».

En el [artículo 11.1 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre \(LA LEY 18232/2015\)](#) se establece expresamente que dichas comunicaciones electrónicas se podrán realizar por:

- **a)** El sistema LexNET
- **b)** **La sede judicial electrónica,**
- **c)** El Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones Electrónicas y la Carpeta Ciudadana provistos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas siempre que los medios tecnológicos lo permitan.
- **d)** Otros sistemas electrónicos de información y comunicación que puedan establecerse.

Por tanto, todos los actos de comunicación dirigidos a las personas jurídicas se realizarán, enlazando LexNET, vía Sede Judicial electrónica, a través del Servicio de Notificaciones Electrónicas compartido con el Ministerio de Hacienda y además se remitirá un aviso a través de la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) proporcionada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

IV. Apuntes jurisprudenciales sobre el tema

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (sentencia n.º 426/18, de 3 de mayo de 2018 (LA LEY 84829/2018)), estima un recurso de suplicación y declara nulo lo actuado por vulneración de derechos fundamentales acordando la notificación conforme a lo dispuesto en el [artículo 155 LEC \(LA LEY 58/2000\)](#), no dando validez, en una interpretación que no comparto, a la primera comunicación a una persona jurídica por medios electrónicos. Transcribo el razonamiento:

«A pesar de la redacción de los citados preceptos, la [Ley 42/2015 \(LA LEY 15164/2015\)](#) mantuvo, con alguna modificación, la redacción del [artículo 155 de la LEC \(LA LEY 58/2000\)](#) que contiene previsiones específicas cuando se trata de los actos de comunicación con las partes aún no personadas o no representadas por procurador. Tal precepto en su vigente redacción establece:

"1. Cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes. En la cédula de emplazamiento o citación se hará constar el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y el plazo para solicitarla.

2. El domicilio del demandante será el que haya hecho constar en la demanda o en la petición o solicitud con que se inicie el proceso. Asimismo, el demandante designará, como domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de éste, uno o varios de los lugares a que se refiere el apartado siguiente de este artículo. Si el demandante designare varios lugares como domicilios, indicará el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la comunicación.

Asimismo, el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de éste, como números de teléfono, de fax, dirección de correo electrónico o similares, que se utilizarán con sujeción a lo dispuesto en la [Ley 18/2011, de 5 de julio \(LA LEY 14138/2011\)](#), reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

El demandado, una vez comparecido, podrá designar, para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto.

3. A efectos de actos de comunicación, podrá designarse como domicilio el que aparezca en el padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional...

4. Si las partes no estuviesen representadas por procurador, las comunicaciones efectuadas en cualquiera de los lugares previstos en el apartado anterior, que se hayan designado como domicilios, surtirán plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse, aunque no conste su recepción por el destinatario.

No obstante, si la comunicación tuviese por objeto la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el interesado, se estará a lo dispuesto en el artículo 158."

De la redacción de tales preceptos se desprende que cualquiera que sea la obligatoriedad de uso de las comunicaciones electrónicas, existe una regla específica que afecta a la citación de las personas o entidades que todavía no se han personado en el proceso y, más concretamente, cuando se ha de llevar a cabo su primera citación a juicio; tal garantía procesal es la que se regula en el [artículo 155 de la LEC \(LA LEY 58/2000\)](#) cuya redacción se ha mantenido tras las reformas operadas por la [L 42/2015 \(LA LEY 15164/2015\)](#) y de su tenor resulta que la primera citación de la parte demandada se ha de llevar a cabo en el domicilio indicado en la demanda; es relevante que el artículo 155 al identificar los diferentes domicilios posibles, en ningún caso se refiere a la dirección electrónica (DEH) que según refleja el artículo 162 pueda ser la contenida en el registro construido o facilitado por el Ministerio de Justicia.

En relación a dicho registro, el propio [artículo 162 \(LA LEY 58/2000\)](#) viene a establecer que en el mismo han de estar las direcciones electrónicas de los profesionales y organismos públicos obligados a su utilización, entre los cuales no se encuentran las personas físicas o jurídicas privadas. El hecho de que el [artículo 273 de la LEC \(LA LEY 58/2000\)](#) establezca la obligación de las personas jurídicas de utilizar la forma electrónica para la presentación de documentos y escritos no constituye una excepción, pues tal obligación se genera en relación a la presentación de documentos y escritos y, por tanto, en un momento posterior a la primera citación a efectos de su comparecencia en el proceso, y tal obligación se refiere a la comunicación de los usuarios de la Justicia con los Tribunales, pero no a afecta a las comunicaciones en sentido inverso.

En el presente caso, consta en la demanda la identificación de un domicilio en el que la empresa demandada habría de ser citada, a pesar de lo cual por el responsable de los actos de comunicación del juzgado de lo social n.º 2 de Cartagena, la citación no fue remitida al citado domicilio, sino a una dirección electrónica no indicada en la demanda que, posiblemente corresponde a la DEH que figura en el registro habilitado por el Ministerio de Justicia. Se ha de indicar, asimismo, que no existe constancia de que tal registro de direcciones electrónicas este integrado con las que las diferentes empresas hayan facilitado al Ministerio de Justicia a fin de que en las mismas se lleven a cabo los actos de comunicación por los juzgados y tribunales, sino que al parecer la DEH corresponde al registro habilitado por la Agencia Tributaria.

Por todo lo anteriormente expuesto, es preciso estimar que la primera citación de la empresa, a efectos de propiciar su primera comparecencia en el juicio y en las actuaciones se llevó a cabo infringiendo las garantías procesales que se establecen en el [artículo 155 de la LEC \(LA LEY 58/2000\)](#), vulneración que genera indefensión, pues ello le ha impedido comparecer a juicio para poder alegar todo lo que a su derecho convenga y, asimismo, eludir los efectos de la *ficta confessio*. Procede en consecuencia la estimación del primer motivo del recurso, acordar la nulidad de las actuaciones desde la fecha en que se intentó la citación a juicio y reponer el estado de las mismas al momento inmediatamente posterior al decreto de fecha 6 de abril del 2017, para que se proceda a la notificación del citado decreto y citación a juicio cumpliendo los requisitos establecidos por el [artículo 155 de la LEC. \(LA LEY 58/2000\)](#)»

Discrepo del argumento sostenido por la Sala, pues si bien el [artículo 155 de la LEC \(LA LEY 58/2000\)](#) sí puede tener operatividad para las personas físicas, debe entenderse derogado tácitamente para las personas jurídicas, *ex* [artículo 2.2 del Código Civil \(LA LEY 1/1889\)](#), haciendo una interpretación del conjunto de las normas acorde al contexto, antecedentes legislativos y realidad del tiempo al que han de ser aplicadas ([art. 3.1 CC \(LA LEY 1/1889\)](#)).

Abunda en este argumento el [artículo 152.3 de la LEC \(LA LEY 58/2000\)](#):

Los actos de comunicación se efectuarán en alguna de las formas siguientes, **según disponga esta Ley**:

1.^a A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquél.

2.^a Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama, correo electrónico o **cualquier otro medio electrónico** que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.

3.^a **Entrega al destinatario de copia literal de la resolución** que se le haya de notificar, del requerimiento que el tribunal o el letrado de la Administración de Justicia le dirija, o de la cédula de citación o emplazamiento.»

Es decir, si hay que elegir entre el medio electrónico del punto 2º y la entrega física o material del punto 3.º, hay que estar a lo que en cada caso establezca la ley, lo que no da prioridad alguna al [art. 155 LEC \(LA LEY 58/2000\)](#), como dice la sentencia de la Sala social TSJ, sino a los demás artículos que dan prioridad a los medios tecnológicos.

Por el contrario, la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, desestiman el recurso de suplicación planteado en similares términos (Sentencia 219/2018 (LA LEY 50866/2018)), argumentando que:

«En el caso de autos consta la notificación por el sistema habilitado Lexnet del decreto de admisión de la demanda en el que figura el señalamiento del juicio y que tal notificación fue retirada y aceptada el nueve de diciembre de 2017. Habiendo cumplido la Administración los trámites y requisitos legales para la notificación de los autos, no apreciándose irregularidad ninguna en la notificación efectuada, no hay motivo para apreciar la nulidad invocada, por lo que el recurso se desestima.

Sobre el particular debemos citar el [Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2.016 \(LA LEY 72866/2016\)](#): "Cuando haya constancia de la correcta remisión del acto de comunicación y transcurran tres días hábiles sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada con plenos efectos procesales. Por tanto, constando correcta la remisión de la comunicación tal y como se constata por el Letrado de la Administración de justicia, el hecho de que el destinatario no hubiera accedido al contenido sino hasta el 9 de diciembre de 2017 no es determinante de nulidad de actos por cuanto la

comunicación se entiende efectuada con plenos efectos procesales. Por todo ello se desestima el recurso".»

En parecidos términos se han manifestado la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (sentencia 180/2018 (LA LEY 56612/2018)), o las Secciones 4ª y 5ª de la Audiencia Provincial de Murcia (auto 68/2018 y sentencia 109/2018 (LA LEY 55823/2018), respectivamente), dando validez a la notificación a personas jurídicas por canales electrónicos.

V. La validez del requerimiento de pago telemático a una persona jurídica en procedimiento de ejecución hipotecaria

Mucho más específico, y que refuerza la conclusión de dar validez a la primera comunicación telemática a las personas jurídicas, la aporta el Informe 12/2018 de la Comisión de Consultas doctrinales del Colegio de Registradores de la Propiedad respondiendo a una consulta elevada por el Centro de Estudios Hipotecarios de Murcia, tras recibir un brillante informe sobre dicha validez remitido por la Directora del Servicio Común Procesal de Ejecución de Murcia a fin de evitar ulteriores problemas en la inscripción de los Decretos de adjudicación que dictasen los Letrados de la Administración de Justicia.

En dicho informe, con carácter doctrinal y dejando a salvo la libertad de calificación se llega a las siguientes conclusiones:

- **a)** La exigencia legal de la fijación de un domicilio trata de conjugar la agilidad del procedimiento de ejecución, facilitando al acreedor el requerimiento al deudor, con la tutela judicial efectiva del mismo, evitando su indefensión, por lo que no se considerará obstáculo que impida la inscripción el hecho de que el requerimiento de pago al deudor, hipotecante no deudor o tercer poseedor, cuando se trate de personas jurídicas, se haya efectuado por medios electrónicos, siempre que del decreto se desprenda que este requerimiento se ha realizado.
- **b)** Si ese requerimiento electrónico ha sido fallido, al menos cuando la persona jurídica a notificar o requerir no haya sido la impulsora del procedimiento y no conste inscrita una dirección electrónica, no puede considerarse que el mismo se ha realizado y, a efectos de la inscripción de la ejecución hipotecaria, debe exigirse que la notificación se haya intentado también en el domicilio que conste en el Registro y, en su caso, en el domicilio real personal al que se ha referido este informe.
- **c)** Se trata, en todo caso, de que la notificación se realice efectivamente en la persona que deba recibirla, de modo que la circunstancia de que figure un domicilio en el Registro a efectos de notificaciones únicamente trata de dar efectividad a esta comunicación, facilitando el desarrollo del procedimiento, pero sin que pueda considerarse un impedimento la circunstancia de que el requerimiento se efectúe por otros medios. A la inversa, la existencia de un domicilio electrónico, no puede excluir la posibilidad de efectuar la notificación en el domicilio personal pactado o real, si aquella resulta infructuosa.
- **d)** Por último, mientras no se modifique el [artículo 682 de la Ley de Enjuiciamiento Civil \(LA LEY 58/2000\)](#), no se considera que sea defecto la ausencia, en la escritura de constitución de hipoteca, del domicilio electrónico a efecto de las comunicaciones con las personas jurídicas afectadas.

VI. Conclusión

A mi entender, con la interpretación integradora de la normativa vigente no cabe duda no solo de la validez, sino también de la obligación de realizar todas las comunicaciones con las personas jurídicas de los actos procesales electrónicamente, a través de la dirección electrónica habilitada, siendo plenamente aplicable el [artículo 162 LEC \(LA LEY 58/2000\)](#) en cuanto a su eficacia y consecuencias. No obstante, a la vista de las posturas discordantes, todas jurídicamente defendibles, sería de agradecer una aclaración vía pleno no jurisdiccional por parte del Tribunal Supremo en evitación de situaciones, como la analizada, que pudieran determinar la nulidad de lo actuado con la pérdida que conlleva, tanto para el justiciable como para las oficinas judiciales. Hay quienes incluso ven razonable el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, que determine la corrección jurídica, o no, del planteamiento sostenido en estas breves líneas. Esperemos acontecimientos, que Doctores tiene la Iglesia.